

## EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. **Fidel Cano**  
Gerente **Eduardo Garcés López** Director **Fidel Cano Correa**

Consejo Editorial

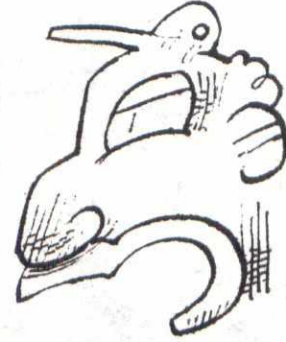
Presidente **Gonzalo Córdoba Mallarino**

**Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro.**

Editor General **Jorge Cardona**

Vicepresidente Comercial Caracol Unidad de Medios **Mauricio Umaña Blanche**

123  
AGUA PARA  
BUENAVENTURA  
GOVA



# Opinión

Directores: **Fidel Cano Gutiérrez**: 1887 - 1919. **Luis Cano**: 1919 - 1949. **Gabriel Cano**: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. **Guillermo Cano**: 1952 - 1986. **Juan Guillermo y Fernando Cano**: 1986 - 1997. **Rodrigo Pardo**: 1998 - 1999. **Carlos Lleras de la Fuente**: 1999 - 2002. **Ricardo Santamaría**: 2003. **Fidel Cano Correa**: 2004 fidelcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y Andarios  
© Comunican S.A. 2016. Todos los derechos reservados.  
ISSN 0122-2856. Año CXXIX. www.elespectador.com

## El grito de auxilio de Buenaventura

**L**ASTIMOSAMENTE, LA VIOLENCIA asomó su rostro en el paro de Buenaventura, distraiendo el debate de fondo necesario sobre una población hastiada por la desigualdad y la violencia que ha tenido que soportar a lo largo de su historia. Contrastan las imágenes del día de los disturbios con las marchas de ayer que, hasta el cierre de esta edición, mostraron una manifestación respetuosa y muy dolida. Si no hay soluciones estructurales, Colombia seguirá de paro en paro y la frustración continuará creciendo.

Los disturbios ocurridos en Buenaventura, donde se incendiaron llantas, se bloquearon vías públicas y hubo saqueos de supermercados, deben ser, por supuesto, rechazados. Cuando la frustración desencadena en violencia, se pierde por completo el debate y la atención del país se ubica sobre la ya conocida dinámica entre el Esmad y los manifestantes. Flojo favor le hace el vandalismo a una causa justa y necesaria, como la de los manifestantes en Buenaventura.

Dicho eso, es importante ver cómo los voceros del paro repudiaron la violencia y evitar caer en las estigmatizaciones facilistas que abundan en estos casos. La realidad es que Buenaventura tiene muchísimas razones para estar en paro y esa debe ser la discusión que ha de darse.

Los cerca de 50.000 bonaverenses que marcharon por las calles de su ciudad, ayer, además de rechazar la violencia,

tenían un mensaje claro: el Gobierno se ha quedado en promesas incumplidas. Eco de lo dicho, por cierto, en el paro del Chocó, y un reclamo común en los distintos grupos que a lo largo y ancho del país se están manifestando.

El caso de Buenaventura es extremo. Su población ha sido históricamente víctima del conflicto, de la pobreza y de la desigualdad, pese a ser uno de los puertos más importantes para la economía colombiana. De los 400.000 habitantes, más de 160.000 se han acreditado como víctimas; entre 1999 y 2003, los paramilitares cometieron 26 masacres en el municipio. El 80 % de toda la población está en condición de pobreza, el desempleo afecta al 60 % y el 17 % es analfabeta. Además, como le dijo a *El País* el padre Adriel Ruiz, quien ha sido vocero durante el paro, "la institucionalidad del municipio no funciona y todo lo que se hace resulta mal hecho o cae en manos de la corrupción, a lo que se suma la violencia". En pocas palabras, es un municipio plagado de fallas estructurales.

Por eso, 89 agrupaciones sociales iniciaron, el mar-

tes de la semana pasada, un paro cívico para pedirle al Gobierno que decrete la emergencia social, económica y ecológica para la ciudad.

Por su parte, el Gobierno ha demostrado que está comprometido con darles solución a las peticiones. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aprovechó, ayer, la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad y dijo que "todavía las brechas sociales y la inercia del conflicto se concentran en territorios como el Pacífico, el sur de Bolívar, Urabá y Darién, entre otros, y eso requiere de políticas". Es decir, hay un reconocimiento estatal del problema y la promesa de recursos. No es menor que se presente esa interlocución.

Lo dijimos en dos ocasiones la semana pasada: a nadie le conviene que Colombia viva en paro. Sólo el de Buenaventura, según datos de la Asociación de Transportadores de Carga, ha generado \$50.000 millones en pérdidas para la industria del país y ha impedido movilizar más de 11,2 millones de toneladas de productos.

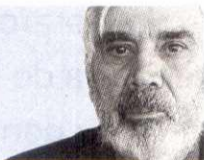
Por lo anterior y porque los bonaverenses merecen una oportunidad de cortar su historia de atraso y desigualdad, esperamos que esta crisis sea el comienzo de un cambio estructural para Buenaventura y el país.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [yosoyespectador@gmail.com](mailto:yosoyespectador@gmail.com)

**“El caso de Buenaventura es extremo. Su población ha sido históricamente víctima del conflicto, de la pobreza y de la desigualdad”.**

## La cuestión agraria, de nuevo

**SALOMÓN KALMANOVITZ**



EL GOBIERNO HA REABIERTO EL debate público en torno al ordenamiento de la propiedad de tierras rurales. Se trata de un tema crucial para tres millones de ciudadanos que insisten en seguir cultivando el campo, como lo han hecho por centurias. El problema de fondo es que nunca fueron considerados como ciudadanos por las elites que monopolizaron la tierra; por lo tanto, no tuvieron derechos de propiedad a los suelos que colonizaron y cultivaron. El conflicto reciente exacerbó la desigualdad pues facilitó el desplazamiento de millones de familias campesinas. En efecto, el Gini de tierras que era de 0,86 en 1970 alcanzó a 0,91 según el Censo Agropecuario de 2014: 0,2 % de las explotaciones son dueñas del 72 % de la superficie, donde varias de ellas pueden ser de un mismo dueño.

Un político y terrateniente notorio es Álvaro Uribe, cuya hacienda El Ubérrimo cuenta con 1.150 hectáreas, muy cerca de Montería. Es tierra fértil que en esa zona

alcanza cotizaciones de \$28 millones por hectárea. La propiedad se acerca entonces a valer \$32.200 millones; no se sabe si es explotada intensivamente. Hace varios años traté de averiguar el impuesto predial que pagaba el expresidente a la ciudad de Montería y lo único que pude averiguar fue que el aporte de todos los predios rurales al municipio era irrisorio. Lo cierto es que la ciudad está muy agradecida por un puente que su administración construyó sobre el Río Sinú y valorizó al Ubérrimo. Tampoco se conoce si el senador pagó impuesto de guerra que él mismo hizo aprobar cuando fue presidente y que después se tornó en impuesto a la riqueza.

La Contraloría cuestionó recientemente que, de esa hacienda, 150 hectáreas habían sido baldíos entregados a campesinos quienes no podían venderlas; el senador tuvo que admitir que posiblemente debería devolver o recomprar esa extensión. Además, la familia Uribe es dueña de otra hacienda en Antioquia, llamada Guacharacas, que tiene una extensión de 2.000 hectáreas, divididas por el Río Nus, más alejada de grandes centros urbanos, pero igualmente muy valiosa. Su primo, Mario Uribe, hoy en la cárcel, iba detrás de los paramilitares que aterrorizaban a campesi-

nos para comprarles barato sus posesiones; así también, miles de empresarios violentos se lucraron del conflicto, agravando la desigualdad.

Lo que quiero resaltar es que Álvaro Uribe representa intereses que se oponen a cualquier cambio en la legislación agraria, sobre todo a una jurisdicción de tierras que falle sobre aquellas en disputa. También se opone al catastro multipropósito que permita cobrar impuestos justos que ayuden al desarrollo de los municipios en donde prosperan esas enormes propiedades.

La propuesta del Gobierno introduce los jueces de tierras que oirán a todas las partes en disputa y fallarán en derecho, protegiendo la propiedad privada de todos. Según Gloria Barney, se da "el reconocimiento de las actividades de la economía del cuidado como hechos positivos constitutivos de ocupación y posesión son un avance importante que es necesario concretar en mandatos precisos". La propuesta no define bien la Unidad Agrícola Familiar e introduce la posibilidad de entregar baldíos a las sociedades jurídicas, lo cual resta del inventario de tierras que puedan ser entregadas a campesinos. Hay que aclarar que, sin un catastro moderno, ni el propio Estado conoce qué tierras le pertenecen.

### Nieves

Como un poeta  
o un congresista ....



"me gustas cuando  
callas  
porque estás  
como ausente"